LAS MUNICIPALIZACIONES DURANTE LA GUERRA CIVIL EN LA CIUDAD DE ALICANTE: 1936-1939

FERNANDO QUILIS TÁURIZ

Cuando en julio de 1936 se produjo la sublevación militar, la guerra civil y la consiguiente revolución social, que paradójicamente los mismos militares que se levantaron contra la República quisieron evitar, las masas obreras representativas del Frente Popular se hicieron con el control de la mayoría del territorio¹. Se inició de esta forma un proceso de transformaciones que se manifestó en las incautaciones de edificios religiosos, fábricas, fincas urbanas y rurales, y en la creación de Consejos o Comités Obreros encargados de que éstas siguieran produciendo y tuvieran una utilidad de cara a la obtención de la victoria. Al mismo tiempo se introdujeron medidas revolucionarias tendentes a la mejora de la situación de las clases trabajadoras y a la abolición del sistema económico capitalista. En esta labor participaron activamente, desde los primeros momentos de la guerra, las dos centrales sindicales CNT y UGT, así como la totalidad de los partidos republicanos de izquierdas con representación en cada municipio. Estos se plantearon bien pronto —dadas sus necesidades económicas y el mismo impulso revolucionario de la guerra— la municipalización² de los servicios considerados básicos en ese momento.

¹ En Alicante, la guarnición militar permaneció fiel al gobierno de la República. Sólo unos pocos sublevados se concentraron en Albacete para hacerse fuertes, pero fueron derrotados por los milicianos. Vide *El Luchador*, días 20, 21 y 22 de julio.

² Las municipalizaciones suponían el paso de ciertos servicios de empresas privadas a titularidad pública, como eran los ayuntamientos. Serán objeto de largos debates en las sesiones plenarias de los concejos locales e incluso de diferencias con los criterios del gobierno en esta materia.

El 29 de septiembre se constituyó en Alicante el Concejo municipal, con representación mayoritaria de CNT y UGT que contaron con doce representantes; el resto de las fuerzas políticas fieles a la legalidad republicana sólo tuvieron nueve³. Su primera medida vendría tras el decreto del Ministerio de Agricultura de 7 de octubre, con la creación de una Junta Calificadora que sería la encargada en el municipio de llevar a cabo las expropiaciones sin indemnización y a favor del Estado de las fincas rústicas que hubieran pertenecido a personas implicadas directa o indirectamente en la insurrección armada.

Aunque existió un precedente de expropiación por las autoridades locales en 1936⁴, fue durante los años 1937 y 1938 cuando en las sesiones plenarias del Ayuntamiento se debatieron las municipalizaciones. Algunas no pasaron de la fase de estudio, como ocurrió con los transportes y la vivienda, pero otras se llevaron a la práctica: las Pompas Fúnebres, cuyas bases regidoras fueron aprobadas el 13 de enero de 1938⁵; y la Lonja del mercado, la cual, dado su interés⁶, merece objeto de un estudio más detenido a continuación.

³ El PSOE y el PC, cuatro concejales, dos cada uno; el PS, uno; la FAI, uno, los republicanos tres: dos IR y uno UR. Vide V. RAMOS, *La Guerra Civil (1936-1939) en la provincia de Alicante*, I, Alicante, 1972, pág. 146.

⁴ El 4 de agosto de 1936, una empresa privada, el Teatro Principal, fue expropiada por el Ayuntamiento. *Ibid.*, pág. 152.

⁵ Tras varias reuniones con el Consejo Obrero de estas empresas, y de acuerdo con la reunión del Cabildo del 17 de diciembre de 1936, las Comisiones de Beneficencia y Hacienda, transcritas en el anexo I, que fueron aprobadas unánimemente, salvo en su punto sexto, el cual hacía referencia al reparto de beneficios. Este fue rechazado porque se consideró propio de una empresa privada y, por lo tanto, ajeno a lo que era la nueva sociedad que estaba construyendo. Archivo Municipal de Alicante (cit. en adelante AMA), *Cabildos*, 1938, sesión del 13 de enero.

⁶ Para entender el papel que desempeñaba la Lonja para el Cabildo en estos momentos, tendríamos que tener presente, por un lado, que era la que abastecía de alimentos a la población en una fase crucial como era la de la guerra, y, por otro, que dejaba cuantiosos ingresos por los impuestos municipales, aplicados a la entrada y salida de mercancías. Sobre la importancia de estos, sirva como dato un estudio realizado por la Comisión de Hacienda, según el

En el pleno extraordinario celebrado el 7 de noviembre de 1936, ésta va a constituir el tema principal de lo tratado. Se encontraba desvinculada del municipio desde el comienzo de la guerra y era administrada en estos momentos por el Sindicato de Alimentación de la CNT⁷, quien no tenía ahora, al igual que la FAI, participación en el Ayuntamiento⁸. Allí se protestó porque el Sindicato, al considerar los impuestos municipales —vigentes en la Lonja— excesivos, los había reducido a lo que consideraba justo: uno sólo de 0,20 ptas. por bulto. Tras mantenerse reuniones por ambas partes y no llegarse a ningún acuerdo —la CNT dejaba además exentas del arbitrio a mercancías consideradas de primera necesidad y además sin tener que pagar los alquileres de las casetas y el pabellón dedicados a oficinas del Comité de Control—, la Corporación dio un voto de confianza a su presidente, para que éste, tomara las medidas que estimara oportunas, con la finalidad de restablecer las anteriores modalidades impositivas, llegado si fuera preciso, a su municipalización. Como seguía sin solucionarse nada, medió el gobernador civil, quien convocó al alcalde, a un representante de la Sección de Abastos del Sindicato de Alimentación y a uno de la Federación Local de la CNT. Tras exponerse los distintos puntos de vista, no se llegó a ningún acuerdo, salvo el de que entrara en vigor

cual entraban a diario unos mil quinientos bultos, sobre los que se aplicaba un arbitrio de 0,35 pesetas por bulto, más otro de 0,25 por carga y descarga, y otro de 0,75 por derechos de comisión; calculándose un ingreso de unas mil novecientas cincuenta pesetas diarias, de las cuales habría que deducir los jornales devengados por los aproximadamente ciento treinta trabajadores y que ascendían a unas setenta y cinco pesetas semanales. *Nuestra Bandera*, 29 de julio de 1937.

⁷ Cuando se produjo la rebelión militar, como algunos de los patronos de la Lonja estuvieron comprometidos con los sublevados, quedó interrumpido su normal funcionamiento. La CNT procedió a su incautación y, de común acuerdo con los trabajadores, se decidió su colectivización. El 6 de marzo de 1937 se registra y reconoce legalmente su socialización por la Comisión de Incautación de Industrias de la Concejería de Economía. *Acta de Socialización*, Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil (Salamanca, leg. 31, exp. 4).

⁸ Ambas se consideraban indiscriminadas y en inferioridad, teniendo en cuenta su implantación real en el municipio, y no estaban de acuerdo con el nombramiento de alcalde porque consideraban a éste incompatible con sus postulados revolucionarios.

el impuesto de los veinte céntimos. Quizás por ello, comenzó por parte de las autoridades locales el intento de hacerse con su administración, cosa que se conseguirá en distintas fases, viéndose favorecida por las continuas quejas y denuncias de irregularidades y especulaciones en los precios de los alimentos y en sus canales de distribución.

1937 marca una nueva fase en la trayectoria del Cabildo, pues supuso la dimisión de su presidente, la toma de posesión como vocales del municipio de las minorías de la CNT y la FAI, y la elección de nuevo alcalde por unanimidad, al que cenetistas y faístas votaron favorablemente⁹. Sin embargo, todo ésto no implicó el voto favorable anarquista a la municipalización de la Lonja. Cuando por acuerdos adoptados en distintas sesiones vayan controlándose sus diversos servicios, los anarquistas, tras manifestar sus razones, votarán siempre en contra de estas medidas¹⁰.

Ese mismo año, en mayo, el Sindicato de Obreros Municipales «La Emancipación», de la UGT, pidió a la Corporación que interviniera el servicio de sacrificios de reses en el Matadero; no obstante, y a pesar de la disposición favorable a esta medida, se aplazó alegando carencia de recursos económicos para hacerle frente¹¹. Sin embargo, dos meses más tarde, se aprobaría unánimemente el proceder a la intervención de la Sección del pescado bajo los siguientes postulados:

⁹ A este hecho no fue ajena la crisis gubernamental que supuso la salida de Largo Caballero y el nuevo gobierno presidido por Negrín. También el que se reconociera el error cometido con los cenetistas. Así lo reconocieron los propios anarquistas en su diario. Vide *Liberación*, 4 de mayo de 1937.

¹⁰ En los debates plenarios mantenidos sobre la municipalización de la Lonja, los anarquistas manifestaron reiteradas veces su desacuerdo, porque al ser ellos quienes la administraban, tal medida les afectaba directamente. No obstante, siempre aceptaron las decisiones adoptadas por el municipio, haciendo observar que llegaría el caso en que le tocaría el turno a alguna empresa controlada por la UGT y que para entonces esperaban la misma firmeza en su ejecución por parte de todos los integrantes de la corporación.

¹¹ AMA, *Cabildos*, 1937, sesión del 27 de mayo.

«1.º Municipalización urgente de los servicios de la Lonja del pescado, con autorización de la Junta de Obras del Puerto que ha de dar toda suerte de facilidades.

2.º Suspensión de las subastas de pescado, del cual se hará cargo la Administración Municipal a los precios de tasa, destinándolo al consumo de la población y el sobrante, con destino a la exportación.

3.º Suspensión asimismo de la venta en ambulancia [sic. por "venta ambulante"] de pescados, el cual será despachado en los puestos de venta del Mercado de Abastos y en los puestos fijos de las afueras y extrarradio que esta Presidencia autorizará, reuniendo las debidas condiciones de higiene, vendiéndose el pescado en unos y otros puestos al precio de tasa que será fijado en carteles bien visibles.

4.º Autorización a esta Presidencia tan amplia como sea menester para procurarse todos los medios personales y materiales que precise para la implantación de la municipalización del pescado en la Lonja, y

5.º Facultarla asimismo, para que, de acuerdo con la Comisión Provincial de Abastos y de la primera autoridad de la provincia, obtenga las colaboraciones y medios precisos para orillar y salvar todos los obstáculos de cualquier índole que sean, que se opongan a la feliz realización de este proyecto.»¹²

A propuesta de la UGT se acordaría también ampliarla al servicio de transporte y al de venta al público de pescado. Sus bases, que fueron presentadas posteriormente por las Comisiones de Hacienda y Mercado, y discutidas en enero de 1938, entrarían en vigor a partir del 1 de febrero. Estas contemplaban, entre otras cosas, la creación de un Consejo de Administración, encargado de su dirección, bajo la presidencia del alcalde y compuesto por el presidente de la Comisión de Hacienda, los miembros de la de Mercados, el administrador de la Lonja de Pescado, un inspector veterinario, un jefe de negociado, un delegado de la Federación de Pescadores de la UGT, un representan-

¹² AMA, *Cabildos*, 1937, sesión del 15 de julio.

te de la Industria Pesquera de la CNT, uno de los expendedores de pescado del Mercado de Abastos y uno de los trabajadores, designado por éstos. Como organismo activo del anterior se creaba una Comisión Ejecutiva, al frente de la cual estaba el presidente de la de Mercados y la integraban cuatro componentes; dos de los cuales forzosamente debían ser concejales o funcionarios del municipio. Asimismo se establecía la realización de un inventario de todos los útiles y enseres, contemplándose la indemnización de su valor a aquéllos que acreditaran ser sus legítimos dueños¹³.

Para la normalización del abastecimiento se hacía evidente, que la medida tomada en julio de 1937 sólo había sido un paso progresivo hacia el total control de la Lonja. En la sesión ordinaria, que tuvo lugar el 30 de diciembre, las comisiones citadas anteriormente, presentaron un informe, el llamado «Plan de establecimientos de municipalización de la Lonja de Frutas y Verduras» (vid. anexo II), por el que se pretendía que todas las funciones desempeñadas con anterioridad por los asentadores o corredores, y ahora ejercidas por el Sindicato Unico del Ramo de la Alimentación, pasaran a manos del municipio. Una comisión formada por representantes de esta central sindical y de la administración local, tasaría todos sus bienes materiales. Su reglamento vigente contemplaba cómo debía regirse y establecía los impuestos que entrarían en vigor a partir del momento de su aprobación.

A este informe se opusieron la CNT y la FAI, porque entendían que el Ayuntamiento debía hacerse cargo de todos sus trabajadores, que eran en estos momentos unos 110 aproximadamente, con el reconocimiento de sus derechos y ventajas actuales; por el contrario, el resto de los integrantes de las comisiones sostenían que no se podía mantener a más personal del que precisaran las necesidades. Al final se aprobó, en los mismos términos contemplados por el estudio previo, su municipalización con los votos contrarios de los anarquistas. Su entrada en

¹³ La mayoría de los reglamentos aprobados para estos servicios presenta grandes similitudes entre sí, lo que sin duda demuestra que se siguió un solo modelo al que se aplicaron las distintas variaciones propias de cada sector.

vigor supuso una reducción del personal activo en plantilla a unos 62, y estableció un orden de prioridad, en cuanto a la antigüedad de servicios, para los que hubieran estado trabajando el 19 de julio de 1936, y no fueran desafectos o enemigos del régimen. Posteriormente, en enero de 1938, se aprobarían las bases por las que debía regirse su Consejo de Administración (vid. anexo III), donde se encontrarían representados todos los sectores, y en el que, a pesar de que los trabajadores querían tener a dos de sus miembros, finalmente prevaleció el criterio de uno solo, pero pudiendo éstos nombrar a sustitutos para los casos en que el titular no pudiera acudir.

Quedaba solamente por municipalizar el sector de los transportes. Dadas las anomalías observadas en la conducción de pescado y de carne al mercado y a las carnicerías, y, debido a que la CNT no pagaba el arrendamiento de sus camiones al Ayuntamiento¹⁴, el Concejo en su sesión del 6 de enero de 1938, en la cual de nuevo votaron en contra cenetistas y faístas —éstos reconocían su culpabilidad en lo tocante al pago, pero culpaban al Cabildo de falta de valentía a la hora de exigir las cantidades adeudadas—, acordó el control de este servicio. Sus bases, aprobadas el 20 del mismo mes, contemplaban los siguientes puntos:

«1.º A partir del día primero de febrero próximo, el Ayuntamiento se hará cargo de los servicios de conducción de carnes y pescado, ejecutándolos por administración directa.

2.º Previamente se hará cargo, previo inventario, de todos los vehículos y enseres afectos a la prestación de estos servicios.

3.º El servicio de conducción de carnes pasará a depender directamente de la Administración del Matadero, y el de pescados a la Administración de la Lonja de pescado.

4.º El personal preciso para la prestación de los servicios de conducción de carnes y pescado quedará incorporado al Mu-

¹⁴ El Sindicato, en septiembre de 1936, había incautado los cuatro camiones, que el empresario tenía arrendados al Ayuntamiento, para cubrir este servicio. AMA, *Cabildos*, 1938, sesión del 6 de enero.

nicipio con los mismos derechos y haberes del que les sea más similar.

5.º El personal sobrante, si lo hubiere después de acoplados a las necesidades de la prestación de servicios, tendrá derecho preferente a cubrir las vacantes en cualquier servicio con la sola limitación de aptitud física y competencia, formándose al efecto las oportunas anotaciones.

6.º La tasación y pago de los bienes expropiados se hará de común acuerdo con el propietario o propietarios legítimos de los mismos; caso de divergencia se designará peritos ajenos a ambas partes.

7.º En tanto no quede consignado un presupuesto de dotaciones para el pago de los servicios que se municipalizan, los ingresos y pagos se controlarán en una cuenta especial dentro de la general del Municipio. La Intervención de fondos adoptará las medidas pertinentes para la organización y contabilidad de los nuevos servicios.»¹⁵

Con estas medidas, quedaba zanjado el tema de la Lonja, ya que el municipio la controlaba en su totalidad, pero los problemas en cuanto al abastecimiento y distribución de alimentos, seguirán estando presentes hasta el final de la guerra.

Las necesidades de conseguir fondos para las arcas municipales y de abarcar servicios considerados como fundamentales para la ciudad no fueron fáciles, ya que, desde un primer momento el gobierno entendió que algunos de éstos, eran única y exclusivamente de su competencia, por lo que frenó mediante sucesivas órdenes y decretos¹⁶ los deseos municipalizadores de las administraciones locales. Quizás debido a ello, no se plan-

¹⁵ AMA, *Cabildos*, 1938, sesión del 20 de enero.

¹⁶ Tal es, por ejemplo, el sentir del decreto del Ministerio de Industria de 8 de mayo de 1937, el cual, haciendo referencia a servicios básicos como los de agua, gas y electricidad, manifiesta que «en ningún caso la ordenación del régimen industrial y administrativo de tales industrias compete a las autoridades gubernativas provinciales ni a las municipales, por ser función estatal privativa de este Ministerio que la ejerce por sus Delegaciones de Industria en las respectivas demarcaciones...».

tearon a cuestión las sociedades de agua, gas y luz. No obstante, la minoría anarquista, el 10 de febrero de 1938, propuso al Cabildo el control sobre los tranvías urbanos¹⁷ urgiendo a éste a un acuerdo en base a que se trataba de un servicio público, y a que el Estado, de lo contrario, se adelantaría en su intervención. La UGT y el PC coincidieron con la medida, pero no en darle un carácter de urgencia, por lo que se decidió pasar su discusión y estudio a las Comisiones de Fomento y Hacienda. En ello se estaba, cuando un decreto de 3 de marzo del Ministerio de Industria dispuso la intervención provisional de Tranvías y Electricidad, S. A., que era el nombre de la empresa que controlaba este transporte, y designó a un ingeniero industrial en calidad de delegado-interventor de la misma¹⁸.

Por último vamos a abordar lo que sin duda alguna fue uno de los objetivos más ambiciosos planteados por los ayuntamientos, sobre todo los de mayor censo de población, aunque primero el gobierno y más tarde el final de la guerra impidieran su realización. Las viviendas urbanas, que habían sido abandonadas por sus dueños —por ser activistas de la rebelión militar o partidarios de ésta—, pasaron a manos de diversas entidades (asociaciones de inquilinos, centrales sindicales, sociedades de porteros y porterías y partidos políticos, sobre todo), quienes las administraban cobrando sus rentas y alquileres. Estas fincas, dado su número considerable¹⁹, eran consideradas por los concejos

¹⁷ Este servicio se encontraba en manos de un comité obrero de la UGT, cuyo sindicato, tras la huida de los antiguos administradores, se había incautado de sus líneas y talleres. La capital contaba con seis trazados: Benalúa, Carolinas, San Vicente del Raspeig (llamada Floreal), Muchamiel, Libertad y Florida, que, en general, se encontraban en bastante mal estado debido a los continuos bombardeos. Daban trabajo, junto con sus talleres de reparación y montaje a unos sesenta obreros, muchos de ellos mujeres, que ocupaban las vacantes producidas por la marcha de los hombres al frente. Vide *Nuestra Bandera*, 6 de agosto de 1937 y 11 de febrero de 1938.

¹⁸ AMA, *Carta de Tranvías y Electricidad, S. A., al alcalde de Alicante*, 6 de mayo de 1938, legajos sueltos, Guerra Civil.

¹⁹ Es difícil establecer con exactitud el número total de fincas urbanas incautadas en el municipio de Alicante, pero, basándonos en las actas de las administradas por el Estado, a través de sus organismos provinciales, se puede

municipales una fuente considerable de ingresos y de ahí que pretendieran su municipalización. Pero por la misma razón económica, y al igual que más tarde se haría con las rurales, el gobierno estableció, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda de 27 de septiembre de 1936, que éstas que se encontraban incautadas por diversas entidades o en situación de abandono por implicación de sus propietarios con los sublevados, pasaban a su propiedad. También arbitró posteriormente (22 de octubre de 1936, 8 de agosto de 1937 y 19 de noviembre de 1938) el procedimiento por el que habrían de regirse y administrarse, corriendo su control a cargo de las Administraciones de Propiedades y Contribución Territorial de cada provincia.

La cuestión, a pesar de que quedaba legalmente zanjada, no impediría que los municipios intentaran en sucesivas reuniones elevar peticiones al gobierno a favor de su municipalización. Tal es el sentido de la Conferencia de municipios de Levante, que se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valencia, durante los días 25 y 26 de julio de 1937, y a la que fueron convocadas por Valencia, las provincias de Albacete, Alican-

aventurar la cifra de unas setenta y tres al finalizar 1936, ascendiendo a unas doscientas sesenta y tres en 1937. El cuadro siguiente corresponde al período entre agosto y diciembre de 1936:

<i>Entidades incautadoras</i>	<i>N.º de fincas</i>
Comisión de Industria	1
Asociación de Inquilinos.....	62
PC	1
CNT-AIT	2
Inquilino Antiguo	1
Sociedad Porteros y Porteras.....	4
Frente Popular. Hacienda	1
Comité Control Gas Alicante	1

Archivo Histórico Provincial de Alicante, *Documentación de la Comisión de Fincas incautadas correspondientes a los años 1936 al 1939*, HG, leg. 809. *Documentación relativa a la administración de fincas incautadas durante el período marxista y administradas por esta Delegación de Hacienda, de propietarios desafectos del régimen del Frente Popular*, HG, leg. 664.

te²⁰, Castellón y Murcia. En la misma se sugirieron varios razonamientos en favor de la medida municipalizadora. Los más importantes fueron los siguientes: el hecho de que muchas fincas incautadas carecieran de control y en muchos sitios ni siquiera se pagaran sus alquileres, que los trabajadores del sector de la construcción se encontraban en paro ante la falta de construcción de viviendas, y sobre todo que las existentes no reunieran los requisitos sanitarios e higiénicos adecuados para los ciudadanos necesitados de éstas. Con las citadas argumentaciones, la Conferencia unánimemente acordó pedir al gobierno la reconsideración de sus anteriores decisiones y la puesta en vigor de nuevas medidas para que los Concejos tuvieran potestad legal en esta materia. No se consiguió nada en este sentido, la orden ministerial de 19 de noviembre volvía a reafirmar que eran las Administraciones Estatales de la Propiedad las encargadas de su gestión, estableciendo además los procedimientos legales a seguir en todos los contratos de arrendamiento que se realizaran entre los inquilinos y el Estado.

En Alicante, como acabamos de ver, no se realizaron muchas intervenciones de empresas por el municipio, y más si lo comparamos con el resto de las llevadas a cabo en otros ayuntamientos de la zona republicana, sobre todo en los que poseía la mayoría la CNT. Aquí, las fuerzas mayoritarias —IR, UR, PC, PSOE y UGT—, que nunca dejaron de estar representadas en el Concejo, coincidían en considerar la municipalización como importante, pero no decisiva para ganar la guerra. Quizás como el servicio que más afectaba a la buena marcha de ésta, era el de los abastecimientos de la Lonja, y además funcionaba con irregularidades, fue el que más atención mereció por parte de las autoridades locales. También debió influir el aspecto económico porque los impuestos por carga y descarga eran una fuente

²⁰ El Ayuntamiento de Alicante había pedido reiteradas veces, al igual que habían hecho los de Madrid y otras provincias, que se municipalizara la vivienda, pero había recibido contestaciones desfavorables por parte del Ministerio de Hacienda (Vide AMA, *Cabildos*, 1937, sesión del 10 de febrero). No obstante, se decidió acudir a la conferencia con tres representantes (AMA, *Oficio del alcalde de Alicante dirigido al Presidente del Consejo Municipal de Valencia*, 17 de julio de 1937, legajos sueltos, Guerra Civil).

de ingresos que revertían directamente a las arcas municipales. La CNT que consideraba éstos excesivamente gravosos, sobre todo para los campesinos que llevaban sus productos a la Lonja, acordó reducirlos a lo que en su criterio era de justicia social y suficiente según sus cálculos para mantener el servicio. No lo entendieron así los restantes miembros del Ayuntamiento, que consideraban insuficiente el arbitrio de los veinte céntimos y por ello optaron por su municipalización y la vuelta de las anteriores modalidades impositivas recogidas en su reglamento.

Anexo I

Bases de municipalización de los servicios de Pompas Fúnebres

«1.º A partir del día primero de febrero próximo quedará municipalizado totalmente el servicio de Pompas Fúnebres y servicios afines.

2.º Se creará un Consejo de Administración dependiente del Consejo Municipal, encargado de dirigir y administrar el servicio municipalizado, el cual estará presidido por el Alcalde-Presidente del Consejo Municipal, siendo Vicepresidente el Presidente de la Comisión de Beneficiencia y Sanidad, e integrado además por el Presidente de la Comisión de Hacienda y los Consejeros de las Comisiones de Beneficiencia y Sanidad, el Secretario de la Corporación, un jefe del grupo de contabilidad, el Administrador o Conserje-Administrador del Cementerio y un representante del personal administrativo del servicio municipalizado y otro del personal obrero del mismo.

3.º Dicho Consejo tan pronto quede constituido formará el Reglamento de su funcionamiento y de los servicios que someterá a la aprobación del Consejo Municipal, también formará la plantilla del personal del servicio y su acoplamiento, proponiendo la persona que haya de asumir las funciones directivas de Administrador.

4.º Todos los bienes de cualquier clase que sean, afectos al servicio municipalizado, quedarán incorporados al Municipio, practicándose un minucioso inventario.

La tasación de los bienes y enseres se efectuará por una Comisión mixta de carácter técnico. Caso de divergencia, serán designados peritos ajenos a ambas partes.

5.º La Corporación de común acuerdo con los propietarios convendrá la forma de pago del importe de los bienes expropiados, así como el pago de los intereses por demora en el pago de la expropiación.

6.º El personal necesario que quede incorporado al servicio municipalizado, tendrá todos los derechos del resto del personal del Municipio, equiparándoseles en haberes al que les sea más similar, dentro de la especialidad o trabajo de cada uno. Independientemente de ello, el Consejo podrá proponer una participación en los beneficios netos del servicio municipalizado, distribuido en proporción a los haberes de cada uno y sin que pueda exceder del cincuenta por ciento del sueldo anual. Será condición precisa que el funcionario no haya sido sancionado por faltas o negligencia en el cumplimiento de su deber en el transcurso del año.

7.º La Intervención de fondos propondrá el sistema de contabilidad del servicio municipalizado y su conexión con la general del Municipio, en la que deberán quedar registradas todas las entradas y salidas de fondos con arreglo a las normas vigentes para la gestión del presupuesto municipal.

8.º El Consejo Municipal conocerá periódicamente la marcha y desarrollo del servicio municipalizado a los efectos procedentes y al final de cada año el Consejo de Administración elevará al Municipio una Memoria resumiendo la labor durante el año y los resultados económicos con las demás propuestas que juzgue pertinentes.»

AMA, *Cabildos*, 1938, sesión del 13 de enero.

Anexo II

Plan de establecimientos de municipalización de la Lonja de Frutas y Verduras

Entre otras cosas el plan contemplaba estos apartados:

1.º Los servicios a municipalizar, que eran:

«a) Todas las funciones que el Reglamento de la Lonja atribuye a los asentadores o corredores, ejercidas ahora por el Sindicato Único del Ramo de la Alimentación.

b) La descarga de los bultos en la Lonja y la carga-descarga o acarreo de los mismos al Mercado de Abastos, ejecutado anteriormente por el personal de los Asentadores o Collas y ahora por los trabajadores del Sindicato del Ramo de la Alimentación. De entre las funciones de los antiguos asentadores, que por su importancia conviene destacar, se comprende el facilitar envases para el tráfico de las mercancías: de un lado con los vendedores y de otro con los compradores. Los restantes servicios han de considerarse municipalizados y sobre los cuales existen disposiciones reglamentarias que sólo cabe cumplir o modificar cuando la práctica así lo aconseja.»

2.º La situación de los trabajadores, sobre la que acuerda:

«a) Dar preferencia absoluta para quedar acoplados a los servicios municipalizados de Lonja a todos los que estaban trabajando en ella el 19 de julio de 1936, que no hayan sido desafectos o enemigos del régimen.

b) Reconocer derecho preferente a ocupar las vacantes o plazas que se precisen al personal que haya estado empleado en la Lonja a partir del 19 de julio de 1936 por el orden de antigüedad de sus servicios.

c) Reserva de la plaza o plazas al personal que haya sido movilizado u esté en el frente como voluntario, siempre que concorra alguna de las condiciones de los dos epígrafes anteriores; considerándose a los que les haya sustituido como suplentes.»

3.º Los medios materiales:

«Por el mero hecho de la municipalización, el Consejo Municipal adquiere el derecho al uso y aprovechamiento de todos los útiles y enseres que han estado o están al servicio de la Lonja, tanto de los antiguos Asentadores como del Sindicato que les ha sucedido en las funciones, cualquiera que sea el lugar y condiciones en que se encuentren, independientemente del procedimiento especial para la indemnización de su valor.»

4.º Las condiciones esenciales que debía requerir su municipalización:

«El Consejo... lo que... pretende es organizar un servicio de un modo adecuado que cumpla esta doble finalidad: facilitar el abastecimiento y garantizar unos precios convenientes al consumidor... Pero se necesita resolver una contradicción basada en el hecho de que los gastos de la municipalización serán proporcionalmente tanto más bajos cuanto mayor número de géneros afluya a la Lonja; y la afluencia es tanto mayor cuanto más elevados son los precios de éstos. Para resolver esta contradicción se debe dotar a la Lonja de agentes de compra, o de una Comisión nombrada por el Consejo Municipal y reconocida por la Consejería Provincial de Abastos, que en los distintos pueblos o zonas productoras se encarguen de realizar las compras... teniendo en cuenta los gastos se procurarán vender a precios de costo... Ello supondría dejar suspendida provisionalmente la facultad reglamentaria por la que el productor o cosechero puede vender directamente sus productos en la Lonja.»

5.º El reglamento vigente por el que se regirá su administración:

«1.º) Control de todas las entradas de géneros en la Lonja mediante un Registro general en el que se expresen todos los datos concernientes a cada expedición, con los demás pormenores que exijan las reglas de buena administración.

2.º) Las ventas serán igualmente registradas con los pormenores de clase de la mercancía, expedición a que corresponda, peso bruto, tasa y neto, precio e importe de la mercancía e impuestos y en su caso del envase o envases.

3.º) Para la salida de todo género de la Lonja, será preciso exhibir el documento que acredite el pago de la misma y en su caso, los envases. Se fijarán necesariamente el precio de venta al público en detall.

4.º) A los vendedores se les liquidará el importe de los géneros vendidos a los escandallos o documento del comprador; se les deducirá del importe de la venta los impuestos y la comisión que el Consejo establezca.

5.º) Todas las salidas de envases de la Lonja, tanto para remitentes como para compradores, ha de quedar afianzada por un sencillo sistema centralizado que la Administración juzgue conveniente. Las bajas por deterioro o inutilización deberán justificarse, así como las pérdidas motivadas. La compra o reposición de envases se hará por el Consejo a propuesta del Administrador y con el informe de la Comisión del Mercado. Los que traigan envases propios con sus mercancías podrán optar: por recoger esos mismos envases cuando hayan sido desocupados, o recibir otros análogos o equivalentes en el acto de la entrega.

6.º) La Administración de la Lonja, de conformidad con la Intervención de fondos organizará un sistema de contabilidad y control en el que se refleje las

entradas y salidas de mercancías con todos los detalles concernientes, determinándose por separado lo cobrado y pagado por la venta, impuestos y otros conceptos. Llevará asimismo, un libro auxiliar de envases, con la debida separación de clases o grupos, en el que conste las existencias del inventario, y las Altas y Bajas correspondientes. Se llevará asimismo, cuando proceda, un libro auxiliar para las operaciones de los agentes de compra con las anotaciones pertinentes.

7.º) Las órdenes de compra a los agentes se harán por escrito, y si se hicieran por teléfono u otro medio, deberá confirmarse por escrito la orden, por el primer correo.

Los agentes de compra vendrán obligados a dar cuenta por escrito diariamente de las compras realizadas. Ninguna compra que no esté comunicada por escrito en el mismo día no podrá obligar al Ayuntamiento, ni tampoco los compromisos que el Agente pueda adquirir, que excedan o rebasen el mandato concedido por escrito.

8.º) El Administrador de la Lonja llevará un Libro registro del personal, del cual deducirá la nómina o relación semanal, cuya orden de pago será firmada por el Presidente del Consejo y sujetándose a los preceptos reglamentarios del presupuesto en vigor.

9.º) Provisionalmente, y en tanto no sea posible refundir en un tanto por ciento sobre el valor de las mercancías, todos los derechos e impuestos para subvenir a los gastos de la municipalización, se fijarán los siguientes derechos:

Comisión: 1 ptas. por bulto de hasta 60 Kg. o fracción comprendida la descarga.

Carga: 0,25 ptas. por bulto de 60 Kg. o fracción.

10.º) La Administración de la Lonja comunicará diariamente a la Intervención de fondos, en el propio estado de recaudación de las tasas, lo percibido por la Comisión, carga u otros conceptos que deberán ingresar semanalmente en Arcas Municipales con independencia de las actuales tasas. Mensualmente enviará también un extracto resumen del movimiento y saldo de las cuentas de los agentes.»

AMA, *Cabildo*, 1937, sesión del 30 de diciembre.

Anexo III

Bases del Consejo de Administración de la Lonja de Frutas y Verduras

«1.º Como órgano dependiente del Consejo Municipal, encargago de la Dirección y Administración del servicio municipalizado de la Lonja de Frutas y Verduras, se crea un Consejo de Administración bajo la presidencia del Alcalde e integrado por los Presidentes de las Comisiones de Mercados y Hacienda y los Consejeros de la Comisión de Mercados, un Representante de la Consejería Provincial de Abastos, a propuesta de la misma, el Interventor de ls fondos municipales, el Inspector-Veterinario jefe, el Administrador de la Lonja de Frutas y Verduras, dos representantes de los organismos productores, uno por cada sindical, un representante de los detallistas o vendedores, designado por los mismos, y un representante de los trabajadores de la Lonja, designado también por los mismos. Todos ellos integran el pleño del Consejo de Administración. Dichos cargos serán gratuitos.

2.º Como organismo activo del Consejo de Administración, funcionará una Comisión ejecutiva, presidida por el Presidente de la Comisión de Mercados e integrada por el Inspector-Veterinario jefe, el Administrador de la Lonja y dos Consejeros de las Comisiones de Mercados.

3.º El Consejo de Administración, tan pronto como quede constituido, cuidará de redactar el oportuno reglamento para su funcionamiento y el de los servicios municipalizados que someterá a la aprobación del Consejo Municipal.

4.º En tanto duren las actuales circunstancias, la adquisición de artículos se realizará con intervención y de acuerdo con los organismos oficiales que por disposición legal tengan asignada la función del abastecimiento.»

AMA, *Cabildos*, 1938, sesión del 6 de enero.

ABREVIATURAS

IR: Izquierda Republicana
UR: Unión Republicana
PS: Partido Sindicalista
PC: Partido Comunista
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
FAI: Federación Anarquista Ibérica
UGT: Unión General de Trabajadores
CNT: Confederación Nacional del Trabajo